



La factura de no invertir en infraestructura

La tragedia que sacude a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí —con un saldo de 64 muertes confirmadas, al momento de escribir estas líneas— no es un simple suceso natural. Es la manifestación violenta y predecible de años de abandono de la infraestructura esencial del país.

El colapso que presenciamos no se limita a caminos y carreteras en mal estado, sino que se extiende a los sistemas críticos que se encuentran bajo la superficie: drenajes, alcantarillados y canalizaciones que han rebasado su vida útil, incapaces de absorber el crecimiento urbano y la intensidad hídrica. Es resultado, asimismo, de la deforestación, que deja vulnerables los suelos, y que hoy es un negocio más del crimen organizado.

Si bien hemos experimentado lluvias extraordinarias en semanas recientes, la justificación meteorológica ignora la realidad estructural. El país no se ha preparado para la nueva normalidad impuesta por el cambio climático, donde los eventos extremos deben ser considerados la base del diseño de la infraestructura crítica. Cuando ésta no es resiliente, actúa como un multiplicador de peligro, agravando la severidad de las inundaciones y exponiendo a la nación incluso a riesgos financieros mayores, como la potencial afectación a su deuda soberana por los costos de reconstrucción.

Esta vulnerabilidad es una decisión política, respaldada por la orientación del gasto público. Los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación han priorizado consistentemente la rentabilidad electoral sobre la protección de largo plazo. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 es la prueba irrefutable: la prioridad se centra en los 17 programas sociales, a los que se destinan 835 mil millones de pesos, una cifra que opaca los 189 mil millones asignados a los diez proyectos de inversión física prioritarios, de los cuales sólo 40 mil millones son para carreteras e infraestructura hídrica. Esta

desproporción fiscal demuestra que la formación de capital físico —aquella que salva vidas y asegura el crecimiento— ha sido relegada en favor de transferencias directas.

A esta política de descapitalización se añade el desmantelamiento del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). La eliminación de este escudo financiero ha marcado un cambio regresivo en la gestión de riesgos. El Fonden era un mecanismo ágil y dedicado para la respuesta inmediata. Sin él, la atención a los damnificados se vuelve más lenta y burocrática, dejando desprotegidos a los mexicanos más desfavorecidos, justo cuando más necesitan una respuesta estatal oportuna.

Los damnificados por estas lluvias no son víctimas sólo del agua, sino también de la miopía política que castigó la inversión estratégica. La protección de la vida y el patrimonio no es una opción de gasto, sino la primera y más ineludible obligación de cualquier gobierno. El costo de esta negligencia se mide, hoy, en 64 vidas perdidas... más las que se acumulen.

BUSCAPIÉS

***Carlos Emilio Galván Valenzuela**, un joven duranguense de 21 años de edad, viajó con su familia a Mazatlán para festejar que se había recibido de la universidad. La noche del segundo día de su estancia pidió permiso a sus padres para ir con dos de sus primas a un bar de la Zona Dorada de ese puerto. En concreto, a un lugar que, hoy se sabe, es propiedad del secretario de Economía del gabinete del gobernador **Rubén Rocha Moya**. La madrugada del domingo 5 de octubre, hacia las 2:30, dejó a sus acompañantes en una mesa para ir al baño. Nunca regresó. Viendo que tardaba en volver, sus primas fueron a buscarlo, pero los empleados del antro se los impidieron. Hoy, **Carlos Emilio** es un desaparecido más. La señal de su teléfono celular fue ubicada, horas después, en otro punto de Mazatlán, pero la policía le dijo a la familia **Galván Valenzuela** que era demasiado peligroso ir por él. Una semana después, ni el negocio ni las autoridades han entregado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que podrían contener información crucial para saber qué pasó. En México, ser joven, salir a divertirse e incluso pasar al sanitario de un bar son cosas que ponen en riesgo la seguridad personal.